



Roj: **STSJ CAT 6861/2024 - ECLI:ES:TSJCAT:2024:6861**

Id Cendoj: **08019340012024103954**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social**

Sede: **Barcelona**

Sección: **1**

Fecha: **20/09/2024**

Nº de Recurso: **3226/2024**

Nº de Resolución: **4839/2024**

Procedimiento: **Recurso de suplicación**

Ponente: **MIQUEL ANGEL FALGUERA BARO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Passeig Lluís Companys, 14-16 - Barcelona

08018 Barcelona

Tel. 934866159

Fax: 933096846

A/e: salasocial.tsj.barcelona@xij.gencat.cat

NIG 0801944420228035964

Recurs de suplicació 3226/2024 T3

Matèria: Acomiadament disciplinari

Òrgan d'origen: Jutjat social 13 Barcelona

Procediment d'origen: Demanda 742/2022

Part recurrent / Sol·licitant: Abelardo

Advocat/ada: CARLES JIMÉNEZ MORERA

Part contra la qual s'interposa el recurs: LA GRANJA FOODS 1959, S.L., FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA)

SENTÈNCIA NÚM. 4839/2024

Magistrats:

II·lm. Sr. Amador García Ros II·lm. Sr. Félix Azón Vilas II·lm. Sr. Miguel Ángel Falguera Baró

Barcelona, 20 de setembre de 2024

En el recurs de suplicació interposat per Abelardo a la Sentència del Jutjat Social 13 Barcelona de data 22 de gener de 2024 dictada en el procediment núm. 742/2022 en el qual s'ha recorregut contra la part LA GRANJA FOODS 1959, S.L. i FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), ha actuat com a Ponent l'II·lm Sr. Miguel Angel Falguera Baró.

FETS

PRIMER. Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre acomiadament, en la qual l'actor al·lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 22 de gener de 2024, que contenia la decisió següent:

«Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta a instancia de D. Abelardo asistido por el Letrado D. Carles Jiménez Morera contra la mercantil LA GRANJA FOODS 1959 S.L representada por D. Sergi López Gol y asistida por el Letrado D. Ernest Hernández Gutiérrez; y debo declarar y declaro el carácter procedente del despido disciplinario de fecha 11/07/2022.»

SEGON. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

«**PRIMERO.**-El demandante, D. Abelardo, mayor de edad, con D.N.I número NUM000 y número de afiliación a la seguridad social NUM001, ha trabajado por cuenta y bajo la dependencia de la mercantil demandada, LA GRANJA FOODS 1959 S.L, con antigüedad de fecha 05/11/2018, percibiendo un salario mensual de 3.318,09 euros brutos con inclusión del prorrateo de pagas extraordinarias.

Respecto a la categoría profesional, desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha 01/01/2020 desempeñó funciones propias de oficial de primera y a partir de dicha fecha comenzó a prestar funciones de técnico (responsable de mantenimiento), (nóminas, contrato y documento de modificación de las condiciones de trabajo de fecha 01/01/2020).

SEGUNDO.-En fecha 11/07/2022 la empresa demandada entregó carta de despido disciplinario al trabajador demandante en la que se recoge: "(...) el pasado miércoles 8 de junio de 2022 el Departamento de contabilidad de la empresa recibió un burofax (...) mediante el cual se dirigían en nombre de su cliente DASSAULT SYSTÈMES SE y sus filiales. El burofax iba dirigido al Director General, el Sr. Hilario, y en el mismo se realizaba una reclamación a través de la firma británica CJCH SOLICITORS por la instalación y el uso del software SOLIDWORKS sin las correspondientes licencias (...).

Ante la insistencia del Sr. Sergi López, el trabajador Sr. Abelardo comenta que se había descargado el programa de forma ilícita porque consideraba que podría ser interesante tenerlo y que era consciente de que este hecho lo había realizado de manera fraudulenta (...).

Seguidamente, se contacta por teléfono con el Sr. Apolonio de la empresa DASSAULT SYSTÈMES, a quien se le expone la versión que tiene la empresa del propio trabajador (quien había indicado que hacía poco tiempo que se había descargado el programa de forma ilegal y que había realizado muy poco uso del mismo) (...). La respuesta recibida posteriormente, aunque el mismo día, por el Sr. Apolonio indica, entre otras cosas, lo siguiente: "*los usos han sido realizados, se reconocen por el cliente, siempre se han efectuado desde el dominio "lagranja.sis", se iniciaron en fecha 2020/03/25 y hasta el día 2022/06/08, es decir, este mes de junio, durante más de un año, no de manera puntual o por unos días. Ordenador con MAC 84*93e5fc373 usando el programa con estas versiones SOLIDWORKS 2020 Standard, SOLIDWORKS 2019 Standard y módulos adicionales de conocido como ilegal (...).*" El ordenador se indica es del trabajador Sr. Abelardo, el cual se le entregó por parte de la empresa para el desarrollo de sus funciones como empleado de La Granja Foods 1959 S.L, con total confianza y no para cometer fraudes de este tipo. Nos adjunta detalle de los días de uso desde dicho dominio, sumando un total de 117 accesos por parte del trabajador Sr. Abelardo (...). Falta muy grave, según recoge y tipifica el artículo 63 del convenio colectivo aplicable: apartado 1) 1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza, la concurrencia y competencia desleales, así como cualquier conducta constitutiva de delito (...). La Dirección establece como sanción aplicable la de despido disciplinario, con fecha de efectos 11 de julio de 2022 (...); (dándose por reproducido el contenido íntegro de la carta de despido que obra en autos).

TERCERO.-En burofax de fecha 08/06/2022 remitido por la representación legal de DASSAULT SYSTÈMES SE y sus filiales a LA GRANJA FOODS 1959 S.L, se recoge: "(...) mi cliente me ha proporcionado la información necesaria sobre el presente caso y me ha formulado las indicaciones para iniciar el ejercicio de acciones legales contra su compañía, por el incumplimiento de los derechos exclusivos que tienen como creadores y desarrolladores del mencionado software (SOLIDWORKS) (...). En aplicación del programa antipiratería, DASSAULT SYSTÈMES le ha ofrecido la posibilidad de regularizar en unos términos ventajosos la instalación y el uso ilícito del software SOLIDWORKS realizado por su compañía, una propuesta que será retirada automáticamente a menos que dentro del plazo de 5 días desde la fecha de recepción del presente, se acepte la regular la situación (...). En el caso de que no recibamos una respuesta a esta carta, DASSAULT SYSTÈMES se entenderá en libertad de iniciar, sin previo aviso, acciones legales contra su compañía en defensa de sus legítimos intereses y reclamar daños (...); (documento número dos presentado por la empresa demandada).

CUARTO.-En el documento de liquidación y finiquito de fecha 11/07/2022 se recoge como motivo de la baja, el despido del trabajador y que "el suscrito trabajador cesa en la prestación de sus servicios por cuenta de la empresa y recibe en este acto la liquidación de sus partes proporcionales en la cuantía y detalle que se expresan al pie, con cuyo percibo reconoce hallarse saldado y finiquitado por todos los conceptos con la referida empresa, por lo que se compromete a nada más pedir ni reclamar (...); (documento número seis presentado por la empresa demandada).



QUINTO.-En documento de fecha 16/12/2021 firmado por el demandante relativo a la regularización del deber de secreto del trabajador, se recoge expresamente: "(...) el empleado queda informado sobre el uso responsable que se debe realizar de las distintas herramientas informáticas que tenga a disposición para el desarrollo de su actividad laboral, en especial del uso del correo electrónico corporativo, del acceso a internet, así como del uso de las diferentes herramientas informáticas (...)"; (documento número ocho presentado por la empresa demandada).

SEXTO.-La empresa demandada no autorizó al trabajador demandante para hacer uso del software SOLIDWORKS sin previo pago de las licencias pertinentes (interrogatorio de parte, testifical de D. Rodolfo y de D. Augusto).

SÉPTIMO.-El demandante no ostenta ni ha ostentado en el último año anterior al despido la condición de representante legal o de delegado de personal.

OCTAVO.-Resulta de aplicación el convenio colectivo del sector de la confitería, pastelería y bollería de la provincia de Barcelona (código de convenio 08001025011994).

NOVENO.-En fecha 27/09/2022 se celebró el preceptivo acto de conciliación ante el CMAC con el resultado de "SIN AVENENCIA". «

TERCER.Contra aquesta sentència la part actora, Abelardo , va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària la qual el va impugnar, LA GRANJA FOODS 1959 S.L. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.-Per la via de la lletra b) de l'art. 193 LRJS sol·licita la part actora la modificació dels fets provats primer, segon, tercer, cinquè i sisè, fent una sèrie de reflexions de part sobre la prova, extraient-ne les seves conclusions i sense cita de cap document o perícia.

Escau d'entrada recordar quins són els criteris conformadors del recurs de suplicació en matèria de revisió fàctica. Per bé que el nostre marc legal és limitat en el seus continguts, la jurisprudència i la doctrina judicial han anat conformat una sèrie d'elements conformadors al respecte, en relació a dues singularitats de la jurisdicció social. La primera d'elles és l'aplicació en el procés laboral del principi d'instància única, el que comporta que les pretensions de les parts i l'acreditació dels fets al·legats quedin circumscrits en el primer grau jurisdiccional, la qual cosa determina que la valoració de la prova sigui competència exclusiva del dit grau jurisdiccional. I la segona de les esmentades circumstàncies conformadores de la revisió fàctica, és el caràcter extraordinari del recurs de suplicació (la "petita cassació" ex STC 173/1995), el que determina que les capacitats revisòries dels tribunals "ad quem" només siguin possibles en supòsits molt singulars i sempre que es compleixin determinades formalitats. És per això que la modificació fàctica només pot prosperar de complir-se els següents requisits:

a) L'existència d'un error en el jutjador en la valoració de la prova, de forma clara i palesa, no basat en conjetures o raonaments. I, com s'afirma a la STC 4/2006, de 16 de gener, per tal que aquest aspecte pugui prosperar davant el tribunal "ad que", *"es imprescindible que se desprenda objetivamente de documentos obrantes en autos o pericias efectuadas en la instancia, sin conjeturas, hipótesis o razonamientos subjetivos"*. Cal indicar que el concepte "error" és objectiu, no subjectiu. En altres paraules, es precis posar en evidència que el jutjador del primer grau ha assolit una conclusió equivocada respecte el contingut d'un concret document o perícia.

b) Que aquest error es basi en documents o perícies que constin en les actuacions que ho posin en evidència. No es tracta, per tant, de la valoració subjectiva de la part recurrent. Com s'afirma a la STS UD 16.11.1998 (Rec. 1653/1998) el document o perícia en que es basa la pretensió el document en què es basa la pretensió ha de tenir *"una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas"*.

c) Que el recurrent assenyali els paràgrafs a modificar, tot proposant una redacció alternativa que concreti la seva pretensió revisòria.

d) Que els resultats que es postulen, encara que es basin en els dits mitjans de prova, no quedin desvirtuats per altres proves practicades al llarg del judici, atès que en cas de contracció ha de prevaler el criteri del jutge d'instància, en tant que la llei li reserva la funció de valoració de les proves, per la qual cosa. l'estimació del motiu comportaria, a la fi, que la Sala actués com a instància, valorant la prova en la seva totalitat (vegi's en aquest sentit la ja citada STC 4/2006).

e) Finalment, que les modificacions sol·licitades siguin rellevants i transcendents per a la resolució de les qüestions plantejades, en relació a la part dispositiva de la sentència (llevat perjudici o gravamen), amb efectes modificadors d'aquesta, atès que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets respecte els què la seva inclusió cap efecte pràctic tindria. S'afirma així a la STS UD 27.03.2000 (Rec. 2497/1999): *"la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes"*.

L'aplicació d'aquests criteris ens ha de dur a la desestimació del motiu. En primer lloc perquè és obvi que s'incompleixen els requisits legals exigits a l'art. 196.3, en no citar-se cap document o perícia. I sense que la sala pugui entrar en el coneixement de les proves d'interrogatori de part i la testifical, en estar legalment mancada de competència funcional, atès que, com s'ha dit, la valoració de la prova correspon en l'ordre social en forma exclusiva i excloent al primer grau jurisdiccional.

SEGON.-Per la via de la lletra c) de l'art. 193 LRJS es denuncia a continuació la infracció d'allò previst a l' art. 61 del conveni d'aplicació, 55 ET i la jurisprudència que es cita. Bàsicament allò que es sustenta és que la descàrrega il·lícita del programa es produí a instàncies de l'empresa demandada.

La sentència d'instància en la seva valoració de la prova afirma el següent:

"Del examen conjunto de la prueba obrante en autos resulta probado que la empresa demandada no autorizó al trabajador demandante para hacer uso del software SOLIDWORKS sin previo pago de las licencias pertinentes (hecho probado sexto). Sostiene esta conclusión el hecho de que el demandante se mostrara dubitativo y contradictorio en sus manifestaciones vertidas en la vista del juicio oral, ya que, si bien es cierto, que en un primer momento indicó que la empresa le había autorizado a descargarse el programa SOLIDWORKS, ante la solicitud de que aclarara quién concretamente le había dado tal autorización, manifestó que no lo recordaba, para terminar declarando que la mercantil, cuando el demandante le solicitó el programa objeto de litigio, le indicó que no lo iba a adquirir e incluso le dijo: "búscate la vida".

Por otro lado, las manifestaciones de los testigos D. Rodolfo y D. Augusto resultaron coincidentes entre ellos y con el resto de la prueba documental obrante en autos.

En este sentido D. Rodolfo manifestó que recibió el burofax en el que se les reclamaba por el uso sin licencia del software SOLIDWORKS y que habló con el Sr. Abelardo, el cual no le dijo en ningún momento que la empresa le había autorizado a usarlo sin licencia, es más, le dijo que "la había liado" y que "estaba preocupado por las consecuencias".

El Sr. Augusto, superior jerárquico del demandante, manifestó que éste le comentó que "la había liado con un sistema informático". El testigo indicó que nadie le autorizó al demandante a descargarse el programa objeto de litigio, es más, llegó a indicar que el Sr. Abelardo no le dijo que necesitaba ningún programa específico para desarrollar sus diseños.

Por otro lado, por lo que respecta a los documentos números uno a seis presentados por la parte actora (e-mails, presupuesto y facturas proforma) no denotan en modo alguno autorización por parte de la mercantil demandada para el uso del software SOLIDWORKS por parte del trabajador demandante sin adquisición de la licencia y permisos necesarios para ello.

Con lo que se debe concluir que, la empresa, a quien incumbe la carga de la prueba, acredita la concurrencia de causa que justifica la extinción del contrato del demandante, al haber transgredido éste la buena fe contractual y haber incurrido en fraude y deslealtad como consecuencia del uso del software SOLIDWORKS sin autorización de la mercantil, provocando una reclamación de daños por parte del titular del software a la demandada".

Atès que, com hem dit, la valoració de la prova correspon a la instància, és evident que l'enjudiciament de la sala s'ha de limitar a la conclusió de que l'actor descarregà en forma il·lícita un programa, i ho feu sense coneixement de l'empresa.

D'altra banda, caldrà recordar que, com reiteradament ha posat de manifest la doctrina, el principi de bona fe és inherent al contracte de treball (art. 5 a) ET), imbricant-se en la seva pròpia essència conformadora. Com s'afirma en la STS UD 27.06.2018 -Rec. 962/2017-: *"El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe que el art. 5. letra a) ET, impone a los trabajadores como uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación -y reitera el art. 20.2º ET al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a la exigencias de la buena fe-, es uno de los pilares sobre el que descansa la prestación laboral y de ahí que el legislador la configure en el art. 54.2 letra d) ET como incumplimiento contractual que pueden ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario"*. Als dits efectes, l'acomiadament s'ha de basar en un incompliment contractual greu i culpable del treballador. Gravetat i culpabilitat de la infracció que comporta que la mateixa

ha d'alterar substancialment la relació entre les parts i ha de malmetre la convivència necessària en el si de l'empresa, fins a fer-la pràcticament impossible pels incompliments del subjecte deutor de la prestació laboral.

Sens dubte que en el present cas ens trobem davant una conducta greu i notòriament culpable que, a més, ha causat evidents perjudicis a la demanda, atès el requeriment efectuat per l'empresa propietària del software, per la qual cosa la sala ha de compartir plenament la qualificació de l'acomiadament efectuat a la instància, el que ha de comportar la desestimació del motiu i, per tant, del recurs en la seva integritat.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació

DECISIÓ

Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per Abelardo contra la sentència dictada pel jutjat del social número 13 dels de Barcelona en data 22 de gener de 2024, recaiguda en les actuacions 742/2022, en virtut de demanda d'acomiadament deduïda per la dita part actora contra LA GRANJA FOODS 1959, SL i el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, pel que la hem de confirmar i la confirmem.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoni atge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, cal acreditar-la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte de la Sala, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl·lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de "ordenant" caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a "beneficiari" ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a "observacions o concepte de la transferència" cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho manem i ho signem.

Els magistrats

Podeu consultar l'estat del vostre expedient a l'àrea privada de seujudicial.gencat.cat.

Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter confidencial i es tractaran amb la màxima diligència.



Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials i que el tractament que se'n pugui fer queda sotmès a la legalitat vigent.

Les parts han de tractar les dades personals que coneguin a través del procés de conformitat amb la normativa general de protecció de dades. Aquesta obligació incumbeix als professionals que representen i assisteixen les parts, així com a qualsevol altra persona que intervingui en el procediment.

L'ús il·legítim de les dades pot donar lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Amb relació al tractament de les dades amb finalitat jurisdiccional, els drets d'informació, accés, rectificació, supressió, oposició i limitació s'han de tramitar conforme a les normes que siguin aplicables en el procés en què s'obtinguin les dades. Aquests drets s'han d'exercir a l'òrgan o oficina judicial en què es tramita el procediment i n'ha de resoldre la petició qui en tingui la competència atribuïda en la normativa orgànica i processal.

Tot això de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, la Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el capítol I bis del títol III del llibre III de la Llei orgànica 6/1985, de l'1 de juliol, del poder judicial.